

Benito Juárez

***Documentos,
Discursos y Correspondencia***

Tomo 13, capítulo CCLXVI

Selección y notas de
Jorge L. Tamayo

Edición digital coordinada por
Héctor Cuauhtémoc Hernández Silva

Tomo revisado y anotado por
Jaime Olveda

Versión electrónica para su consulta
Aurelio López López



Año 2006

Tomo 13, capítulo CCLXVI

**Anotado y revisado por
Jaime Olveda
(El Colegio de Jalisco)**

Capítulo CCLXVI

**Los gobernadores de Jalisco y de
Guanajuato ante el gran jurado**

Mayo de 1868

CAPÍTULO CCLXVI

LOS GOBERNADORES DE JALISCO Y DE GUANAJUATO ANTE EL GRAN JURADO

Mayo de 1868

Desde fines de 1867 el gobernador de Jalisco, Antonio Gómez Cuervo, había sido objeto de continuados ataques por parte de los grupos políticos que le eran hostiles en la entidad, quienes en algunas ocasiones lo acusaban de poco diligente y enérgico frente al bandolerismo imperante y en otras le llamaban arbitrario y duro.

El Congreso local, alarmado de la inseguridad provocada por la existencia de numerosas partidas de asaltantes y plagiarios, resolvió expedir una drástica ley en la que, suspendiendo las garantías individuales, daba facultades a las autoridades administrativas para que, sin trámite judicial alguno y sólo bastando su identificación, se les aplicara la pena de muerte a quienes se les comprobara esas actividades.

El gobernador sancionó y puso en vigor el 2 de febrero, el decreto número 61 conteniendo esa ley. Pocas semanas después, el 23 de febrero, fueron aprehendidos cinco individuos bajo el cargo de ser asaltantes, a los que rápidamente se les aplicó la pena de muerte en la madrugada del día siguiente, no obstante de haber sido amparados por el juez de distrito de Guadalajara.

Las autoridades judiciales federales de esa ciudad manifestaron públicamente su disgusto por la desobediencia de su mandamiento.

Inmediatamente se formó una corriente adversa al gobernador Gómez Cuervo que culminó con la acusación que en su contra presentaron, el 9 de marzo, los diputados federales Juan Robles Martínez, Silviano Moreno y A. Angulo, solicitando que fuera llevado Gómez Cuervo al Gran Jurado Nacional. Con este documento se inicia el

capítulo y podrá observarse que fue turnado a la sección del Gran Jurado, la que inmediatamente se avocó al estudio de la denuncia.

Al conocerse en Jalisco esta acusación produjo gran sensación y numerosos grupos, asociaciones y personas hicieron representaciones a favor de Gómez Cuervo, quien resolvió separarse temporalmente del cargo, solicitando una licencia de seis meses, sustituyéndole, por acuerdo de la Legislatura, Emeterio Robles Gil.

El gobernador interino al ponerse a las órdenes de Juárez, en carta personal, hace ver el desagrado que esa acusación ha producido en Jalisco.

El 9 de mayo, el Congreso, presidido por Francisco Zarco, se erigió en Gran Jurado y escuchó el dictamen de la comisión respectiva, que se reproduce en el capítulo. Consideró culpable al gobernador de Jalisco Antonio Gómez Cuervo de la violación de las garantías individuales.¹ Se dejó en suspenso el procedimiento hasta el 28 del mismo mes en espera de que ocurriera al Congreso a defenderse, personalmente o por medio de un representante.

El Congreso de Jalisco objetó la decisión del Congreso de la Unión y recurrió a la Suprema Corte de Justicia, según se hizo público.²

El Gobernador Gómez Cuervo, en comunicación fechada el 15 de mayo en Guadalajara, se dirigió a los secretarios del Gran Jurado, haciendo su defensa. Remitió copia del decreto número 2 de 3 de enero en que se estableció un juicio expedito por medio de jurados para castigar el bandidaje y que no fue eficaz.

Explica que, por ello, el Congreso local, a propuesta del Ayuntamiento de Guadalajara y en general de la opinión pública de la entidad, expidió el 31 de enero el decreto número 61. Señala que está obligado, por la Constitución particular del estado, a promulgar sin observación y hacer cumplir las leyes expedidas por el Congreso. Que tuvo, por lo tanto, que aplicarse esa ley, por el jefe político de Guadalajara en el caso de los cinco individuos. Que como el amparo fue

¹ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 10 de mayo de 1868, p. 1.

² *El Siglo Diez y Nueve*, México, 26 de mayo de 1868, p. 3.

solicitado contra actos de él, se limitó a informar al juez de distrito que no era el gobernador la autoridad responsable; que lamentablemente la respuesta no llegó a manos del juez oportunamente. Declara finalmente que "desde hoy me someto a la resolución que se dicte, pues mi conciencia me dice que no he sido criminal y esto me tranquilizará en caso de que fuere condenado".

El 28 de mayo, el Congreso después de examinar diversos asuntos de trámite, se erigió nuevamente en Gran Jurado, para examinar la acusación contra el Gobernador Gómez Cuervo.

El secretario Juan Sánchez Azcona, de acuerdo con lo dispuesto por el reglamento, dio lectura al voluminoso expediente, iniciado con la acusación presentada por los diputados Juan Robles Martínez, Silviano Moreno y A. Angulo, siguió con el dictamen de la sección del Gran Jurado, la defensa ya citada de Gómez Cuervo de 15 de mayo, los anexos a la misma, los documentos en relación a la demanda de amparo a favor de los cinco condenados y la enérgica comunicación del Tribunal Superior de Circuito de Guadalajara al gobierno de Jalisco, participándole que, según su parecer, el gobierno local ha "dado el ejemplo lamentable del poco respeto que le debe el pacto federal". . . "ultrajando la justicia federal, representada en el juzgado de distrito a quien ni siquiera se tuvo por conveniente contestar". Terminada la prolongada lectura se puso a discusión el dictamen de la sección del Gran Jurado. Hablaron, apoyando las conclusiones del dictamen, los diputados J. F. López, Miguel J. Barrón, Hilarión Frías y Soto y Francisco Zarco, quien descendió del presidium para ocupar la tribuna y pronunciar un elocuente discurso en el que se destacan las siguientes expresiones: "El día que el pueblo vea que un gobernador u otros funcionarios públicos caen legalmente, ese día quedarán asegurados los grandes principios de la República."³

En contra, no precisamente del fondo del dictamen, habló el diputado Jesús Sánchez Román, que considera que la acusación es una maniobra para derribar al gobernador Gómez Cuervo; también ocupan la

³ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 30 de mayo de 1868, p.3.

tribuna difiriendo del dictamen los diputados Estanislao Cañedo y Ramón Rodríguez, quienes no ofrecieron argumentos de importancia.

El diputado Pablo Gudiño y Gómez dijo que si se aprueba el dictamen "en el estado de Jalisco se valentonarán los malhechores; y para la República, puede suceder que cualquier juez de distrito destituya a un gobernador".

Se da finalmente oportunidad de ocupar la tribuna al Sr. Alfonso Lancaster Jones, defensor de Gómez Cuervo, secretario del gobierno de Jalisco, quien pronuncia un conceptuoso y elegante discurso que se incluye en el capítulo, tanto por su gran valor literario como porque es una magnífica síntesis del problema, que lo reduce a que el gobernador no puede negarse a promulgar la ley aunque sea anticonstitucional y también está obligado a aplicarla, mientras no se derogue.⁴

Puesto a votación nominal, 114 diputados consideran que el gobernador Gómez Cuervo debe ser enjuiciado y 25 opinan lo contrario. Una muestra de la independencia con que actuaban los yernos de Juárez aparece en el acta, ya que Santacilia votó a favor del dictamen condenatorio y Contreras Elizalde en contra.

El presidente del Congreso anunció que turnaría el expediente a la Suprema Corte de Justicia para iniciar el juicio en contra de Gómez Cuervo.

El 2 de junio la Suprema Corte de Justicia, después de recibir el expediente, se constituye en Jurado y cita para el 20 del mismo mes al acusado "para aplicar al Sr. Gómez Cuervo las penas de ley".⁵

⁴Alfonso Lancaster Jones (1842-1903) Abogado y diplomático. Nació en Guadalajara, Jal. Participó en la lucha contra la Intervención francesa. Secretario del gobierno de Jalisco, más tarde diputado al Congreso de la Unión. Durante la efímera presidencia de José María Iglesias, fue secretario de Relaciones; además, senador durante varios períodos. Representó a México en el Reino Unido como Ministro Plenipotenciario; por razones de salud renunció al cargo. Se le recuerda como literato en prosa y verso. Tanto él como sus descendientes han tenido participación destacada en la política, actividad económica y vida académica de Jalisco.

⁵ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 3 de junio de 1868, p. 3.

Fue hasta el 22 de agosto que la Suprema Corte de Justicia examinó el caso de Gómez Cuervo, resolviendo, por mayoría de votos, absolverlo.⁶

El ministro de Justicia e Instrucción Pública, Antonio Martínez de Castro, seguramente preocupado por el problema de fondo que representó el caso de Gómez Cuervo, escribió a León Guzmán, procurador general, el 22 de mayo, pidiéndole su opinión sobre la ley de Amparo del 26 de noviembre de 1861, en relación con la responsabilidad de los funcionarios que tienen que cumplir leyes u órdenes de carácter anticonstitucional.

Es hasta el 19 de junio que León Guzmán le contesta a Martínez de Castro, en carta que se reproduce en la parte relativa a la consulta. Se trata de un cuidadoso estudio que se apoya en antecedentes mundiales y estadounidenses para examinar el procedimiento, que permita al Ejecutivo federal o local poder negarse a promulgar y cumplir leyes anticonstitucionales o ilegales. Termina proponiendo reformas a la ley del 26 de noviembre de 1861.

Antes de concluir el mes, el 29 de mayo, tuvo que erigirse nuevamente el Congreso en Gran Jurado para considerar la acusación contra el gobernador de Guanajuato, a quien se le acusa de violaciones a la Constitución y leyes locales con motivo de las pasadas elecciones.

Constituido el Gran Jurado, se dio a conocer el dictamen de la sección correspondiente. Informa que efectivamente se aportan pruebas en relación a esos cargos, pero como no es de la incumbencia del Congreso de la Unión intervenir en esos casos, por lo que, sin prejuzgar sobre los hechos denunciados que son de jurisdicción local, propone se declare que "el ciudadano Florencio Antillón, gobernador constitucional del estado de Guanajuato, no es culpable por violación de la Constitución ni leyes federales".

Puesto a votación, se aprobó el dictamen por 161 votos contra 18.

⁶ *El Siglo Diez y Nueve*, México, 23 de agosto de 1868, p. 3.

GÓMEZ CUERVO DEJA EL GOBIERNO DE JALISCO
TEMPORALMENTE

Guadalajara, mayo 21 de 1868

Sr. Presidente de la República
Lic. don Benito Juárez
México

Señor de mi aprecio y consideración:

Habiendo pedido licencia por seis meses el Sr. don Antonio Gómez Cuervo para separarse del gobierno, la Legislatura me ha electo como uno de los insaculados para que entre a desempeñar sus funciones y el día 18 tomé posesión del gobierno, según habrá usted visto tal vez en los documentos oficiales que se han publicado.

Aunque mi permanencia en este puesto debe ser muy transitoria, deseo, durante ella, caminar en toda armonía con el Ejecutivo de la Unión y al efecto ruego a usted que me haga cuantas indicaciones juzgue necesarias, seguro de que en la órbita de mis atribuciones las obsequiaré con positivo gusto.

Aquí tenemos noticias no muy buenas de Tepic; los presos de Sinaloa no han venido, como se aseguró y, al contrario, algunos de ellos escriben que gozan toda clase de garantías y que permanecerán en aquella ciudad indefinidamente. Es indudable que los 3,000 fusiles que se supone fueron extraídos por Toledo de un almacén de San Blas se hallan en poder de Lozada y que todo lo que se ha dicho y escrito para hacer creer lo contrario es valor entendido.

La Legislatura del estado ha aprobado últimamente se haga una iniciativa al Congreso de la Unión para que se resuelva definitivamente la

cuestión de Tepic, se ha nombrado la comisión que la redacte y, aunque llegue a México cuando el Congreso haya cerrado sus sesiones, la luz pública la verá y quién sabe qué efecto producirá en Tepic.

El negocio de la acusación del Sr. Gómez Cuervo ha producido aquí grande sensación; se han remitido al Congreso varias representaciones en favor del Sr. Gómez y en este momento recibo de la Legislatura la declaración de que le acompañaré un ejemplar, porque se me ordena que en el acto la mande a la imprenta como lo verifico.

Tengo dos días de entrada al gobierno de quien, por más que se diga, había permanecido distante y por eso no le hablo a usted más detalladamente sobre la verdadera situación. Tendré a usted al tanto de lo que ocurra y me repito su afectísimo seguro servidor q. b. s. m.

Emeterio Robles Gil

SE ACUSA AL GOBERNADOR DE JALISCO
ANTE EL CONGRESO NACIONAL

Señor:

El día 2 de febrero próximo pasado, el Sr. don Antonio Gómez Cuervo, que funciona como gobernador del estado de Jalisco, sancionó el adjunto decreto, que bajo el número 61 expidió la Legislatura del mismo estado, el cual importa una ley privativa, de efecto retroactivo, cuya aplicación queda encomendada al Poder Ejecutivo y en él están violadas las garantías que, por respeto a la vida y libertad del hombre, señala el artículo 29 de la Constitución de la República.

El día 23 del mismo febrero, a la media noche, fueron aprehendidos cinco individuos y decapitados de orden del Sr. Gómez Cuervo, en las primeras horas del día siguiente, sin que precedieran forma alguna de juicio.

Las víctimas en vano pidieron amparo de sus garantías individuales a los tribunales de la federación, amparo que les fue ampliamente decretado mandando suspender la ejecución, pues el Sr. Gómez Cuervo, infringiendo los artículos 101 y 102 de la Constitución y ley orgánica de 30 de noviembre de 1861, despreciando lo decretado oportunamente por el juez de distrito, hizo que los cinco individuos fueran decapitados en la plaza principal de Guadalajara.

Ha hecho todavía más el Sr. Gómez Cuervo; ha manifestado a los tribunales de la federación que no obedecerá las órdenes que le comuniquen, encaminadas a estorbar las ejecuciones que él decreta.

El Tribunal Superior de Circuito ha dado cuenta y remitido todos los antecedentes de este negocio al Ministerio y a la Suprema Corte de Justicia de la nación.

Por todas las infracciones constitucionales, ya referidas, los que suscribimos acusamos al Sr. Gómez Cuervo ante el Gran Jurado nacional.

México, 9 de marzo de 1868.

Juan Robles Martínez Silvano Moreno A. Angulo

Sección del Gran Jurado. México, marzo 14 de 1868.

Pídanse al ministerio de Justicia los antecedentes que sobre este negocio le remitió el Tribunal de Circuito de Jalisco. Lo decretó la sección.

<i>(Francisco de Paula) Cendejas</i>	<i>(Antonio) G. Carrillo</i>
<i>(Protasio P.) Tagle</i>	<i>(Juan) Sánchez Azcona</i>

En la misma fecha se cumplió lo mandado.

TAJANTE RESOLUCIÓN DEL JUEZ DE DISTRITO

Guadalajara, febrero 24 de 1868

En virtud de que el ciudadano gobernador del estado ni aun se ha dignado contestar el oficio que se le libró a las cinco de la mañana (cinco y veinticinco minutos) y que le fue entregado oportunamente y siendo notorio que la ejecución se verificó en la plaza principal de esta ciudad a las ocho y veinticinco minutos, con desprecio de este juzgado e infracción de la Constitución de 1857; para que tales actos no se repitan en desprestigio de los tribunales federales, dese cuenta con este expediente original al Superior Tribunal de Circuito, para la providencia que tenga a bien dictar.

*Trejo**A. Ángel Pérez**A. José María Díaz*

Enterado el Promotor Fiscal.

ENÉRGICA DECLARACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE CIRCUITO DE GUADALAJARA

Este tribunal, impuesto de las diligencias que practicó el juzgado de distrito, con motivo del recurso de amparo de garantías que promovió el defensor de presos ciudadano Lic. Ignacio Matute, a nombre de los cinco individuos que fueron decapitados ayer en la plaza de armas, entre ocho y nueve de la mañana, tiene el penoso deber de hacer presente al gobierno del estado, en cumplimiento de su acuerdo de hoy, que tanto el defensor, como el promotor fiscal y el juez de este distrito, ajustaron su procedimiento a la Constitución general de la República y a la ley orgánica de 30 de noviembre de 1861.

Con no poca sorpresa se ha visto que, sin embargo de que el juez decretó el amparo, mandando suspender la ejecución, cuya providencia comunicó al gobierno oportunamente; éste sin detenerse, a pesar de la inmensa responsabilidad que iba a reportar, llevó adelante su disposición, violando así la Constitución general de la República, su ley orgánica de 30 de noviembre de 1861, y ultrajando la justicia federal, representada en el juzgado de distrito a quien ni siquiera se tuvo por conveniente contestar.

Como existe la persuasión en este Tribunal, de que con el suceso que ha dado lugar a la presente nota, no hay un recurso eficaz para que el gobierno de este estado garantice la acción de la justicia federal, sobre que reposa la observancia del Código fundamental de la República, en esta fecha se dirige a los Supremos Poderes de la Unión, para que, como celosos guardianes de la ley, resuelvan lo que a bien tengan.

El tribunal de circuito de esta capital, abriga el pesar de que Jalisco haya dado el ejemplo lamentable del poco respeto que le debe el pacto federal, cuando es notorio que en las demás localidades, no obstante de haberse encontrado en igual situación con respecto a estar invadidas de

plagiarios, asesinos y ladrones, las autoridades respectivas, obrando dentro de la órbita de las leyes constitucionales, han dictado medidas cuyo resultado ha sido su exterminio, sin propasar la esfera legal.

Independencia y Libertad. Guadalajara, febrero 25 de 1868.

Leonides Torres

Tomás Bravo
Secretario

LA SECCIÓN DEL GRAN JURADO CONSIDERA CULPABLE A GÓMEZ CUERVO

Señor:

La sección del Gran Jurado ha hecho el más escrupuloso examen del expediente instruido con motivo de la acusación que presentaron a la Cámara los ciudadanos diputados Robles Martínez, Moreno y Angulo, contra el gobernador constitucional de Jalisco don Antonio Gómez Cuervo. Con la conciencia íntima de la gravedad e importancia de este asunto, los que suscriben han creído de su deber detenerse en meditadas discusiones, a fin de consultar al Gran Jurado nacional lo que juzgan de la más estricta justicia.

La sección no cree necesario hacer un extracto del proceso en que están consignadas las pruebas de los hechos que motivan la acusación, porque este procedimiento le parece inútil, supuesta la lectura in extenso del expediente, hecha con arreglo a las prescripciones reglamentarias, que instruirá suficientemente a la Cámara hasta en sus más pequeños pormenores. Bástale para su propósito consignar los hechos que aparecen justificados; hacer la aplicación de los preceptos legales que sirven de fundamento a la acusación, y deducir la consecuencia en que esté contenida la opinión que ha podido formar del asunto, sujetándola a la sabiduría del Jurado.

La Legislatura de Jalisco expidió en 31 de enero del presente año, un decreto poniendo en vigor la circular que sobre delitos de robo dictó el Supremo Gobierno de la República, en 12 de marzo de 1861. A la simple lectura de este decreto se ve de una manera clara e in-tergiversable, que está en abierta oposición con una gran parte de los mandamientos contenidos en la Carta federal de 1857, vigente en la República desde el

8 de diciembre del año próximo anterior, en que cesó la dictadura creada para hacer frente a las dificultades de la última guerra extranjera.

En concepto de los que suscriben, no es ni siquiera dudoso el principio de que sólo el Congreso de la Unión o, en sus recesos, la diputación permanente, previo el acuerdo del gobierno en consejo de ministros, pueden suspender las garantías otorgadas a los habitantes de la República en el acta de derechos que contiene la sección 1ª del título 1º de la Constitución. El artículo 29 de la Ley fundamental no sólo reserva a la Cámara esta importante facultad sino que se la restringe cuidadosamente, señalando los casos en que puede hacer uso de ella, los puntos especialísimos que le es vedado tocar y las condiciones precisas a que debe sujetarse al ejecutarla.

No contentos los legisladores de 1857 con haber hecho la declaración explícita que entraña ese artículo, quisieron todavía alejar cualquiera duda o equivocación, estableciendo, en el artículo 126, la base sobre que se afirma el derecho constitucional, cuyas reglas forman la Ley Suprema de toda la Unión a que deben sujetarse las autoridades del país a pesar de cualquiera disposiciones contrarias que se contuvieren en las constituciones o leyes de los estados.

Consiguientemente, la Constitución general y las leyes orgánicas expedidas para completarla y hacer prácticas la división y atribuciones de los poderes federales, están muy elevadas en cuanto al acatamiento y respeto que les son debidos sobre los regímenes locales, cuya primera condición es la de subordinarse siempre a las estipulaciones contenidas en el pacto social. Ni puede oponerse a esto el carácter de libres y soberanos que tienen los estados de la federación, en cuanto a su administración interior, porque precisamente la condición de ser de esta autonomía, mana y está basada en la Carta federal que es la raíz y principio de nuestras instituciones y, por lo mismo, no puede comprenderse en el ejercicio de aquel derecho la violación y menosprecio de la ley fundamental.

Siendo esto así, no debió expedirse ni menos observarse en el estado de Jalisco, el decreto que su Legislatura mandó promulgar en 31 de enero anterior, porque en su virtud se suspenden las garantías

concedidas en los artículos 13, 14 y 20 de la Constitución. Los diputados que forman aquel cuerpo serán responsables personalmente con arreglo a la Constitución del estado, por ese hecho que constituye una falta cometida en el desempeño de sus atribuciones, y puede considerarse que lo es también el gobernador don Antonio Gómez Cuervo, porque no sólo puso en práctica las disposiciones de ese decreto, a todas luces anticonstitucional, sino que fue todavía más allá que la Legislatura y expidió un reglamento en 2 de febrero último, delegando en las autoridades subalternas, políticas y militares, las facultades discrecionales de que se creía investido.

En la aplicación del decreto a que se ha hecho referencia, ocurrió el suceso que motiva esta acusación y cuya naturaleza creemos poder examinar con probabilidades de acierto, a la luz que arrojan de sí las anteriores consideraciones.

Fueron aprehendidos en Guadalajara cinco hombres, que, según el rumor que circuló después de su aprehensión, habían cometido el delito de plagio; y se dijo en el público que, al amanecer del día 24 de febrero anterior, iban a ser pasados por las armas, sin que hubiera precedido formación de causa, ni pasado siquiera el más breve tiempo necesario para la averiguación del hecho que motivaba su sentencia a la última pena. El juez de distrito de Jalisco, a petición del defensor de presos, y con arreglo a la ley orgánica de 30 de noviembre de 1861, mandó oportunamente suspender la ejecución mientras se abría el juicio de amparo, y comunicó esta providencia al gobernador don Antonio Gómez Cuervo. Este funcionario, por las razones que hizo valer en su contestación, recibida por el juez de distrito un día después de haber sido ejecutados los reos en cuyo beneficio se decretó el amparo, o por cualesquiera otras, no dio cumplimiento al decreto judicial de suspensión que ponía a los reos bajo la égida de la justicia federal. Tal hecho importa una violación flagrante del artículo 4º de la ley citada de 30 de noviembre de 1861, mina por su base las instituciones sociales y es, por consecuencia, un capítulo indeclinable de responsabilidad. Las exculpaciones a que ocurre el acusado al contestar los cargos, no son bastantes a juicio de la sección, para menguarlos, ni menos para

destruirlos. Se reducen aquéllas a dos puntos; en primer lugar, el Sr. Gómez Cuervo cree que el deber que la Constitución del estado le impone de cumplir las leyes del mismo, le releva de hacer observar la Constitución del estado y las leyes generales; y en segundo lugar, piensa que la situación anormal en que se hallaba el estado de Jalisco, abona y justifica sus procedimientos.

Ya hemos hecho notar cuán inexacta e ilegal es la apreciación en que se funda la primera de sus exculpaciones, y respecto de la segunda, es fácil observar que, cualquiera que sea el carácter de necesidad dada a la causa impulsiva de un acto punible, no es bastante para evitar el procedimiento jurídico, aunque pueda a su tiempo alegarse como circunstancia atenuante, para quebrantar el rigor de la ley en la sentencia. Resultando de todo lo expuesto, a juicio de los que suscriben, que es legal y fundada la acusación que motivó la secuela de este proceso, concluyen sometiendo a la ilustrada deliberación del gran jurado nacional, lo siguiente:

Se declara que el ciudadano Antonio Gómez Cuervo, gobernador del estado de Jalisco, es culpable de infracción de la ley general de 30 de noviembre de 1861, y la Constitución.

Sección del Gran Jurado. México, mayo 9 de 1868.

(Francisco de Paula) Cendejas (Antonio) García Carrillo

Protasio P. Tagle

(Juan) Sánchez Azcona
Secretario

EL GOBERNADOR DE JALISCO HACE SU DEFENSA

Gobierno Supremo del estado de Jalisco
Ciudadanos secretarios del Gran Jurado
México

Citado por la secretaría del Gran Jurado para comparecer el día 28 del corriente, a defenderme ante él de la acusación que se ha hecho contra mí, por violación de las garantías individuales, y sin perjuicio de verificarlo, si me fuere posible, ya personalmente, ya por medio de un defensor, quiero desde luego que el Gran Jurado tenga conocimiento de los documentos que acompaño y que pueden tener alguna influencia en la decisión del negocio de que me ocupo. Ellos formarán mi única defensa en caso de que lo corto del tiempo que se me ha concedido para comparecer, no me permita hacerlo de otra manera.

Electo gobernador del estado de Jalisco contra mi voluntad, contra mis aspiraciones y cuando jamás había figurado ni pretendido figurar en ningún puesto público, creí, sin embargo, de mi deber como ciudadano aceptar lo que para mí era un sacrificio, ya que como liberal había hecho antes el de ver resignado, que fueran por ese motivo destruidos mis cortos intereses por los reaccionarios en una época, por los intervencionistas y franceses en otra, no obstante los falsos reproches que hoy se me hacen por el espíritu de partido, de haber servido al Imperio y sobre lo cual da las explicaciones suficientes el documento número 1.

Al encargarme del gobierno, lo hice con el firme propósito de ser siempre el fiel intérprete de la ley, de que ella fuera la norma de mi conducta y de procurar cuanto bien fuera posible a una sociedad que, tan sin méritos de mi parte, me elevaba. Tengo la convicción de que, en cuanto mi insuficiencia me lo ha permitido, no he llegado a separarme de aquel camino, y esto es lo único que ahora me hace ver con tristeza que

se me juzgue criminalmente cuando mi conciencia me dice que no he faltado a mi deber.

No quiero, de propósito, pintar el estado de alarma en que a principios de este año se encontraba todo el estado de Jalisco, debido al inaudito e increíble desarrollo del bandidaje más feroz, que cometía crímenes y depredaciones aun en las calles principales de la capital; sé bien que por los enemigos del gobierno se dice que tal estado se exagera, y por eso dejo mejor que hablen los hechos que no se podrán contradecir.

Para poner coto al mal que he mencionado, el Congreso del estado expidió, con fecha 3 de enero, el decreto de jurados que acompaño marcado con el número 2, en el cual, dándose a los acusados todas las garantías constitucionales, se determinaban procedimientos breves y se dictaban todas las medidas que se creyó podían conducir al resultado que se deseaba. Los jurados se establecieron, pero los robos y los plagios continuaron, porque el decreto no tuvo la eficacia suficiente para atemorizar a los bandoleros, quienes, preciso aunque triste es decirlo, contaban, si no con el apoyo directo de la oposición, sí con el apoyo moral que encontraban en ver diariamente desprestigiada y puesta en ridículo la autoridad por las diarias y sangrientas invectivas que sin razón se le dirigían, por publicaciones que sólo han podido existir debido a que el gobierno, esclavo fiel de la ley, ha querido respetar hasta lo último la libertad del pensamiento y de la prensa.

Ante la ineficacia del decreto de 3 de enero, la alarma en la sociedad fue de tal naturaleza que el día 31 del mismo mes se presentaron en el Congreso una comisión del Ayuntamiento de Guadalajara, pidiendo se dictaran medidas más severas y una numerosa reunión de ciudadanos para entregar la exposición que bajo el número 3 se encuentra en el número que agrego del periódico oficial del estado, correspondiente al día 6 de febrero.

El Congreso no pudo resistir ante las exigencias de una población poseída del terror; comprendió que si bien sólo el Presidente, de acuerdo con el consejo de ministros y con aprobación del Congreso de la Unión, puede en ciertos casos suspender las garantías constitucionales, este derecho deben tenerlo también los estados en casos urgentes, y que no

dan lugar a ocurrir a la federación, como tienen el de hacer la guerra a una potencia extranjera, aun cuando el artículo 112 de la Constitución lo prohíbe en lo general, y como tiene el que se ve asaltado por un bandido el derecho de matarlo sin esperar a que lo condenen los tribunales. El Congreso, bajo la presión de las circunstancias, expidió, en el mismo día 31 de enero, el decreto número 61 de que acompaño un ejemplar bajo el número 4.

La fracción 1ª del artículo 28 de la Constitución particular del estado (documento número 5) fija, entre las atribuciones del gobernador, la de publicar, cumplir y hacer cumplir todas las leyes, y de cuidar de la conservación del orden público.

La inteligencia de esa fracción está fijada desde el año de 1862, por el mismo Congreso, en los mismos documentos oficiales que subrayados se encuentran (en) el cuaderno número 6 —páginas 19 y 25— y posteriormente en la fracción 3ª del artículo 16 del decreto número 73 —documento número 7.

El gobernador, en virtud de ese precepto constitucional, tiene la obligación de publicarla bajo la responsabilidad exclusiva de la Legislatura, las leyes que ésta expida inmediatamente que las reciba, y sin que le sea permitida observación ninguna, pues está declarado que el gobierno no las sanciona, y sólo es el órgano de la publicación como en los cantones del Estado lo son después de los jefes políticos y directores.

Sentado este precedente, yo no contraje, pues, responsabilidad ninguna por la publicación del decreto número 61; cumplí simplemente con mi deber constitucional y no puede hacérseme cargo por ello.

Publicado el decreto cuya ejecución se encomendaba a las autoridades políticas, sin que el gobierno tuviera en ella ninguna intervención, la tranquilidad pública comenzó a renacer; y más aún cuando en esos días fueron aprehendidos cinco plagiarios, que se juzgaron con arreglo a él, y cuyos crímenes se comprobaron en debida forma, según se ve en la copia certificada de la acta que se formó conforme a la circular de 12 de marzo de 1861 —documento número 8.

La sociedad toda estaba en expectación de lo que iba a suceder; los reos fueron condenados a muerte, y su ejecución se convirtió en una

necesidad tal, que si se hubiera suspendido, habría esto ocasionado un trastorno, porque todo el mundo habría visto en ello la declaración solemne de impunidad para los criminales de su especie.

La prueba de esto existe en que no bien fueron los reos ejecutados cuando de la mayor parte de las poblaciones comenzaron a venir votos de gracias al Congreso, al gobierno y al jefe político, entre los cuales pueden verse los que se encuentran publicados en los números 185, 188, 189, y 200 del periódico oficial del estado —documentos números 9, 10, 11, 12 y 13—, cuyos números se acompañan para el efecto.

A las cinco de la mañana del día de la ejecución recibí un oficio del Juez de Distrito, ordenándome que aquélla se suspendiera por haber los reos solicitado amparo de garantías. Di entonces la respuesta que obra en el expediente, haciendo mérito de mis obligaciones como gobernador del estado; esta respuesta la di con anticipación debida para que el juzgado de distrito pudiera dirigirse, bien al Congreso, autor de la ley, bien al jefe político encargado de cumplirla. No sé por qué, incidente casual o no, el oficio fue llevado al juez de circuito, y el de distrito no lo recibió sino después que los reos habían sido pasados por las armas. Peto supuesto el estado de la situación, y sobre todo cuando yo no era ni el autor de la ley ni el encargado de cumplirla; cuando no era a mí a quien el juez de distrito debía haberse dirigido sino al jefe político o al Congreso, ¿habría sido prudente, habría sido político, aun cuando yo hubiera sido el que decretara la ejecución, suspenderla como se ordenaba? Yo creo que en aquellos momentos mi responsabilidad se habría afectado, introduciendo de nuevo la alarma y la agitación en una sociedad que humanitaria siempre y enemiga de los espectáculos sangrientos veía entonces, sin embargo, su salvación en que se ejecutaran (a) aquellos cinco criminales.

Llamo la atención del Gran Jurado sobre la circunstancia de que cuando estos hechos pasaban en Guadalajara, en el Congreso general se había formulado ya por el ministro la iniciativa para que se declarase vigente la ley de 25 de enero de 1862, cuya discusión no ha venido a terminar sino hace muy pocos días. ¿Qué habría sucedido si en vez de dictar el Congreso del estado su decreto número 61, hubiera permanecido

indiferente y tolerado hasta ahora que continuara la violenta situación en que se encontraba Guadalajara?

Si, como dije antes, me fuere posible concurrir a la sesión del Gran Jurado, personalmente o por medio de un defensor, amplificaré entonces las razones que no he hecho más que indicar. De cualquiera manera, desde hoy me someto a la resolución que se dicte, pues mi conciencia me dice que no he sido criminal y esto me tranquilizará en caso de que fuere condenado.

Guadalajara, mayo 15 de 1868.

Antonio Gómez Cuervo

DISCURSO DE ALFONSO LANCASTER JONES COMO DEFENSOR DE GÓMEZ CUERVO

Señor:

Al levantar aquí por vez primera mi voz, pesa hoy, más que nunca, sobre mi espíritu, la idea de mi propia insuficiencia. Yo he sido conducido repentinamente, y por inesperados sucesos, a este recinto, donde con tanta frecuencia la justicia y razón han tenido la fortuna de encontrar la bella forma de ovaciones elocuentes, para presentarse vestidas de gala a los ojos de los representantes del pueblo en días de gloria para mi patria; y debo asegurar que, en el breve tiempo que ha transcurrido desde que tengo conocimiento de haberse iniciado ante la representación nacional el grave asunto de que voy a ocuparme, apenas he podido darme cuenta a mí mismo de la situación en que me coloca el encargo, que sin vacilar acepté, de defender la más justa de las causas.

Si yo lo admití, fue porque, en las circunstancias en que se me confirió, constituía para mí un sagrado deber. Ningún deber alcanza más que hasta donde llegan las fuerzas del que tiene que cumplir, (por) lo (que) yo me propongo agotar las mías; pero careciendo del espacio indispensable, de la tranquilidad y luces necesarias para dar a mi misión el lleno que otra persona en distintas condiciones le daría, inclino respetuosamente mi insignificancia ante la alta sabiduría del Gran Jurado, y le suplico y espero que supla la ineficacia de mi débil palabra, con las importantes consideraciones que su ilustración y la misma naturaleza del asunto le sugieran.

Quizá más de una expresión saldrá de mis labios poco meditada, y que por tanto no signifique con exactitud mi pensamiento. Yo ofrezco de antemano explicarla a la menor indicación de los que así lo desearan. Me será forzado reseñar algunos hechos relacionados con la vida pública de

ciudadanos prominentes en la escala política, y acaso poner la mano sobre puntos sensibles a que estén unidas ciertas susceptibilidades (que) por lo mismo tengan que afectarse, por más suave y delicada que sea la manera de tocarles.

Protesto desde luego que mi intención no es hacer daño y que, lejos de complacerme en causarlo, me es tan penosa esta idea, que si de mi personal causa se tratara y no de intereses y derechos ajenos, depondría gustoso todas mis armas ofensivas ante la justa estimación que aquellos ciudadanos me merecen. Doy por no dicha cualquiera frase que pueda sustituirse por otra más conciliable con este sincero sentimiento y con la realidad de las cosas, y cumplido así mi primer deseo, procedo a desempeñar las difíciles funciones que me proporcionan el honor de dirigirme al Gran Jurado de la nación.

Señor:

Nombrado yo por el ciudadano gobernador constitucional del estado de Jalisco, Antonio Gómez Cuervo, su defensor y representante en el negocio a que se contrae el dictamen de la sección del Gran Jurado, a que acaba de darse lectura, y en el que se pide se declare al referido ciudadano reo de infracciones constitucionales por haber publicado y dado cumplimiento al decreto número 61 de la Legislatura de aquel estado, ejecutando a cinco plagiarios, he consagrado el muy poco tiempo de que he podido disponer, al examen concienzudo de la acusación que motiva el dictamen de que hago mérito. Para que ella pueda ser considerada por todos los ciudadanos diputados que forman este augusto tribunal, bajo el punto de vista en que, como resultado de ese dictamen, tengo que fijarla, me es preciso rogarles se sirvan prestar su atención a la historia, que en breves términos haré, de los más notables sucesos que han traído a Jalisco a la situación en que hoy se encuentra, y por último, efecto de ellos, al jefe de su Poder Ejecutivo al banquillo del acusado, que yo ocupo en su nombre, y en el que la santa igualdad republicana coloca de igual modo al grande y al pequeño, pero del cual la mano de la nación ayuda a levantarse al inocente.

El ciudadano general en jefe del antiguo Ejército de Occidente, facultado por el Supremo Gobierno de la República para nombrar

gobernadores y comandantes militares de algunos estados, depositó, en enero del último año, el mando del de Jalisco en el ciudadano Antonio Gómez Cuervo. Por aquellos días el ciudadano Emeterio Robles Gil, quien tiene ahora el carácter de primer insaculado para el gobierno del mismo y lo desempeña, por licencia de que aquél goza, se había dirigido a la ciudad de San Luis (Potosí), donde residía el Supremo Gobierno general, con el objeto de obtener la solución de algunas graves dificultades que, para la conservación del estado y su buena marcha administrativa, presentaba la falta de instrucciones y de previo acuerdo con el ciudadano Presidente sobre materias de interés capital y del resorte exclusivo de los poderes federales.

Conseguido este objeto, allanadas estas dificultades con un acierto superior a todo elogio, pudo el ciudadano Gómez Cuervo, en las circunstancias difíciles y peligrosas, consiguientes a la violenta transición de un orden de cosas a otro diverso, afianzar en el estado el orden legal, la paz y la tranquilidad. Se dedicó, a la vez, a reorganizar los distintos ramos de su administración interior, y a procurarse todos los recursos posibles para auxilio de las fuerzas federales y sostenimiento de la campaña contra el invasor y los traidores. Sin apelar a extorsiones de ningún género, sin vejar a las clases propietarias y trabajadoras de la sociedad, y creando al mismo tiempo el crédito del estado, que por primera vez ha existido en él, después de muchos años de completo desorden en su hacienda y absoluto desprestigio de sus gobernantes en este respecto, logró proporcionarse, sin gravamen alguno del erario, los recursos indispensables para las costosas atenciones que lo abrumaban, siendo de notarse que a la fecha está casi amortizada la deuda que para este fin se vio obligado a contraer. Impartió a todos la protección de las leyes, sin las excepciones odiosas que son tan comunes en épocas de guerra, impidiendo que los agentes subalternos de la administración convirtiesen en personal provecho y satisfacción de innobles pasiones, la fuerza y la autoridad pública, y permitió, por último, el pleno uso de todas las libertades constitucionales cuando legalmente podía, si hubiera querido, restringirlas a los límites de la conveniencia del poder, como lo hicieron entonces otros funcionarios de igual carácter.

En todo esto, señor, no hizo otra cosa que cumplir con el deber que le imponían, antes que su elevado encargo, los principios democráticos que profesa y que muchos decantan, pero que pocos practican.

Yo no me propongo, pues, elogiarle, por este motivo, sino sólo indicar las causas que le granjearon el aprecio de sus conciudadanos.

Casi familiarizadas las poblaciones, por una larga serie de infortunios que es por demás referir, a ver en el gobierno, por el solo hecho de serlo, un enemigo poderoso, a quien es preciso adular y temer, concibieron por el jefe provisional del estado el afecto que fácilmente puede suponerse. Había quienes creyeran posibles, por virtud de las circunstancias, y porque en otras análogas las sufrieron, todas las calamidades que suelen formar el cortejo de la guerra, y abren por lo regular el paso a una modificación política: las exacciones violentas, la persecución apasionada, las prisiones arbitrarias, los decretos tiránicos, las venganzas personales, la mordaza a la prensa, el castigo del pensamiento, el silencio de la opinión. Nada de esto tuvieron que lamentar: no digo yo que lo esperaban, pero si les hubiera sobrevenido, no les habría causado sorpresa, pues aún no desaparecen en Jalisco las hondas huellas que señalan el camino extraviado y tortuoso de alguno de sus gobernantes.

Así pasó con tranquilidad perfecta y satisfacción general aquella corta época, cuya memoria, por más que se quiera, jamás será ingrata ni deshonrosa para el estado, hasta que vino el día de convocar al pueblo a la elección de sus representantes y mandatarios. Las aspiraciones de algunos, buenas y malas, legítimas e ilegítimas, hasta allí latentes y entregadas sólo a la contemplación de la perspectiva seductora que les ofreciera una próxima vuelta al orden constitucional, brotaron de súbito a la faz de la cosa pública, establecieron su campo y declararon la más cruda guerra al hombre que ocupaba el puesto codiciado, tanto en la esfera política, como en el corazón del pueblo.

La oposición presentó su candidatura: postuló a un ciudadano ameritado por mil títulos, y distinguido por sus luces y talentos, pero que perteneció, en elevada categoría, a una de las administraciones de que Jalisco conserva pésimos recuerdos, los cuales vinieron a herir vivamente

la imaginación del pueblo, poniendo ante sus ojos un notable contraste con la situación que a la vez guardaba y estimulándola a conservar ésta.

No he desconocido nunca los servicios que ese ciudadano ha hecho en distintas épocas a la causa republicana, ni seré yo quien aproveche esta oportunidad para reproducir a la faz de la República entera los terribles cargos que de el sentimiento público, exaltado por el temor de nuevos desastres y peligros, fulminó sobre él, en medio del calor irritante de la lucha electoral. Enorgulleciéndome de sentirme libre de todo rencor mezquino o ciega animadversión (sic), creo que, en el concepto que tengo de la conducta pública de aquel antiguo funcionario de Jalisco, no he pasado de los límites de la verdad, y detenido en ellos contemplo con sincero pesar los exagerados avances de sus contrarios.

Echar sobre uno o dos hombres toda la responsabilidad del malestar general de un pueblo, es cosa que sólo hacen la ignorancia, la mala fe o la desgracia exasperada, que casi siempre es injusta.

Si en política se juzga un hecho abstracto, por su valor intrínseco y absoluto, separándolo de los demás que le preceden, que lo acompañan o que lo siguen, ese hecho se reputa tal vez malo; pero si se le relaciona con las circunstancias que lo rodean, con las causas que lo determinan, y se entra en el análisis de las complicaciones que lo producen, se viene acaso a estimarlo como bueno, aunque siquiera sea en la intención de su autor, que es lo que constituye su moralidad.

¡Cuántas veces el gabinete secreto de un hombre público es el potro horrible en que martiriza sus más caros sentimientos para acallar su voz! ¡Cuántas veces un principio social o político es la divinidad implacable a que se ofrecen en holocausto las convicciones más puras y acaso la vida y más que la vida, la República! ¡... En política, señor, hay actos que, si se cometieran en el orden privado, serían verdaderos crímenes; pero que en ese inmenso laboratorio de grandes combinaciones no son acaso más que errores, que dejan pesares muy parecidos a los remordimientos, pero que no quitan los medios de conseguir la rehabilitación y la quietud de la conciencia! Por otra parte, las ideas y carácter de los hombres, en este terreno, participan de las mismas modificaciones que sufren la cosa pública, y no se puede deducir en

general la conducta que ellos observarían hoy, por la que siguieron ayer. Pero los pueblos no raciocinan de este modo; rechazan la mano que ayer los ofendió aunque hoy se les acerque para acariciarlos. Tal ha sucedido en Jalisco, y lo dicho sirva para explicar cómo la oposición fue vencida allí por una mayoría inmensa.

Concluida esta cuestión, por el fallo soberano e inapelable del pueblo, era de apetecerse que los descontentos procuraran conciliar en lo posible, con este resultado, aquellas de sus aspiraciones que fuesen legítimas y aceptables. Mas no fue así; todas sus esperanzas han sobrevivido a su derrota. Yo, señor, sería el primero en justificarlas, porque todos están en su derecho para pretender lo que creen más conveniente al interés común; sería, digo, el primero en justificarlas, siempre que en los medios de que se sirvieran para obtener su realización no encontrara nada reprochable; porque yo no acepto la máxima funesta de que el fin santifica los medios. Los que se han adoptado en Jalisco para eliminar de la escena política al ciudadano Gómez Cuervo, no son buenos, y protesto que yo quisiera sinceramente que lo fuesen, aunque esto debilitara la causa que sostengo, por tal de que se ahorrara a mi estado los males que sobre él empiezan a pesar y los muchos que lo amenazan.

Yo he visto con positivo interés las cuestiones locales que han producido en otros estados la división del partido liberal, y confieso que he envidiado para el mío la noble oposición que en muchos de ellos se hace al poder. Allá se acusan con valor los verdaderos abusos para impedirlos en lo sucesivo; en Jalisco, prostituyendo la libertad de la prensa, de que lo mismo gozan la razón que la invectiva, la calumnia y el insulto, los abusos se exageran o se inventan. Allá se manifiestan los males, se investigan aun procedimientos y se indican sus remedios. En Jalisco, triste es decirlo, se procura aumentar los males para crear a la administración rémoras que sólo ceden en perjuicio de los pueblos.

Uno de los efectos necesarios de los profundos trastornos que han conmovido al país, han sido la miseria y la desmoralización en altos grados, y por consecuencia de ellas un espantoso vandalismo. Jalisco, en

mayor o menor escala, ha sido y es aún como otros estados, víctima de esta plaga que anuncia destruir en su base el orden social.

Durante el tiempo de la administración provisional del ciudadano Gómez Cuervo, estuvo allí vigente, como en todo el país, la conocida circular del 12 de marzo de 1861; mandada aplicar por (el) ciudadano Presidente a los delitos que ella expresa por disposición de 7 de mayo del año próximo pasado. Las prescripciones de esta circular chocan, es verdad, con los preceptos de la Constitución, con los principios generales del derecho y las ideas progresistas y humanitarias que profesamos los demócratas; pero sólo se podría calificar de monstruosa y bárbara su observancia, si se la juzgara en un estado de cosas diverso del que la hizo indispensable, y no con relación a las circunstancias extremas en que la exigía y la reclamaba la salvación de una sociedad amenazada de completa ruina por el desbordamiento de los más atroces crímenes, que los recursos y leyes comunes serán incompetentes para reprimir. Bien doloroso debió haber sido al ciudadano Presidente, el ponerla en vigor; pero él no vaciló ante el deber supremo de conservar el país que le había confiado sus destinos.

Merced a esta disposición y usando de ella con la mayor economía de sangre, pudo el gobierno de Jalisco garantizar las vidas y fortunas de sus habitantes, que, a pesar de tan enérgica medida, continuaron siendo objeto de tan escandalosos atentados. Tan crecido así era el número de los malhechores y tal el dominio que habían extendido sobre los caminos desiertos y sobre las poblaciones aterrorizadas desde el tiempo del llamado gobierno imperial.

Algunos días después de restablecido allí el orden constitucional, y durante los cuales había seguido en vigor la circular a que me refiero, la Legislatura la derogó, sustituyéndola con el decreto de jurados que lleva el número 59.

¿El solo restablecimiento de aquel orden era suficiente para cambiar la faz social? ¿Con eso bastaba para dar desde luego y en un día a los municipios, cuya riqueza había disminuido considerablemente y cuyos arbitrios apenas cubrían sus necesidades comunes, los recursos necesarios para organizar en el acto una policía eficaz? ¿Con eso bastaba

para devolver a esa multitud de miserables, que se han puesto en lucha abierta con la sociedad, el hábito del trabajo que han perdido con la vida aventurera y viciosa que han arrastrado a la sombra de todas las banderas levantadas hasta ahora en el país? ¿Con eso bastaba para que se pudiera crear como por encanto el sistema penitenciario o el de deportación a un lugar seguro, y remplazar con ellos de una manera provechosa las penas severas que se aplicaban al robo, al asesinato y al plagio? ¿Con eso bastaba para que los ciudadanos pacíficos recobrasen instantáneamente la conciencia extraviada de sus deberes sociales y de su superioridad sobre los bandidos, cosa indispensable para comprender y cumplir el cargo de jurado, cuando han seguido en muchos años, por falta de espíritu de asociación y protección mutua y de confianza en la autoridad, el inmoral sistema de huir siempre de aquéllos en lugar de perseguirlos, o bien el de protegerlos y ocultarlos para granjearse su buena voluntad?

No, señor, no se transforma a una sociedad en un solo momento ni por medio de un decreto. Después de expedido el que hablo, y a pesar de él, la situación de Jalisco debía seguir siendo la misma la víspera, y las mismas, por consiguiente, las razones que habían hasta allí justificado los procedimientos excepcionales.

Muy pronto se conoció la absoluta ineficacia de este decreto. Los jurados condenaban a simple prisión a los plagiarios aprehendidos en momentos en que aún gemían bajo el infame yugo de sus cómplices, las víctimas de este horrendo crimen. Nadie se ofrecía a declarar contra los culpables, porque se temía verlos salir libres de un día a otro, a retar a sus denunciantes.

Ese terror secreto que inspira la idea de un peligro, que siempre está cerca y que nunca se ve venir, prestaba a los plagiarios, en la imaginación de todos, proporciones exageradas. Se llegó a creer que habían formado una liga poderosa, oculta y ramificada en todas partes, en las poblaciones, en los campos, en el mismo hogar doméstico. Aun aquellos que habían rescatado su libertad con fuertes sumas de dinero, guardaban en sigilo impenetrable los pormenores del delito, porque se figuraban rodeados siempre de puñales prontos a herirlos a la menor palabra que saliera de sus labios.

De esta suerte, el desarrollo del plagio fue inaudito: el vandalismo en general, que la severidad de los anteriores procedimientos había logrado disminuir en gran manera, reapareció con fuerza nunca vista y con audacia sin freno y llegó a ser tal el espanto y alarma que infundió una serie no interrumpida de atentados de toda clase, que la población de Guadalajara se dirigió en masa a las autoridades clamando por la pronta adopción de medidas enérgicas y salvadoras.

Entonces los enemigos del gobierno andaban diariamente a caza de noticias de todos los crímenes que se cometían, para consignarlos, en papeles públicos, y pintaban en ellos la situación de Jalisco, con tan estudiado recargo, con sus más odiosos colores, que cualquiera pensara que se complacían en reproducir aquel cuadro desolador. "He aquí, dijeron, la obra de la ineptitud, de la indolencia, de la debilidad de nuestros gobernantes; dad garantía a la sociedad o abandonad el puesto a los que sepan y puedan dárselas."

No siento bastante la institución de jurados ni la persecución más activa posible para remediar el mal, y cediendo a tan imperiosas exigencias, la Legislatura expidió su decreto número 61, con aplauso general de los habitantes del estado. La tranquilidad y la confianza pública empezaron a recobrase. Ya los representantes del pueblo habían puesto en manos de las autoridades las armas indispensables para triunfar en esa lucha a muerte a que había retado a la sociedad entera, una turba de forajidos.

No tardó mucho en tener su saludable efecto esta disposición. Cinco de los principales plagiarios fueron aprehendidos, juzgados y condenados a muerte con arreglo a ella. La criminalidad de estos desgraciados era indudable, y necesario su ejemplar castigo.

"¡No violéis las garantías individuales, respetad la Constitución!" gritaron entonces los enemigos del poder.

Señor, los gobiernos de ningún modo aciertan en el concepto de sus opositores sistemáticos. Para los enemigos del de Jalisco, había llegado la oportunidad de colocarlo en una alternativa cuyos dos extremos le eran igualmente perjudiciales.

La víspera de la ejecución de los reos, y a una hora avanzada de la noche, un ciudadano, a quien no ligaban ningunos vínculos con ellos, compadecido del terrible castigo que les esperaba, se presentó ante el juez de distrito interponiendo el recurso de amparo. Este funcionario le manifestó que no podía dictar providencia alguna sobre tal solicitud, mientras ésta no se hiciera por los mismos reos o por su representante legítimo. Acudió entonces el protector oficioso, al defensor de presos, en demanda de que él interpusiese dicho recurso. Entablado así, y admitido éste en la correspondiente forma, el juez de distrito libró oficio al gobernador del estado para que suspendiese la ejecución, debiendo desde luego abrirse el juicio respectivo.

El cálculo era inmejorable, el golpe era doble, estaba asegurado de todas maneras, el gobernador estaba perdido; o perdido él solo o perdido juntamente con la sociedad. Si no acataba en aquellos momentos lo dispuesto por la autoridad federal, lo condenaría el Congreso de la nación, y si impedía que se llevara adelante el castigo de los bandidos, caería envuelto en la segura ruina de los hombres honrados. Él dio el oficio, la respuesta que obra en el expediente instructivo de acusaciones que se ventila.

He aquí, señor, en resumen, los antecedentes de este grave negocio. Lo que llevo dicho, es la verdad, y de intento no he querido insistir sobre algunos pormenores, a fin de que no se crea que me propongo exagerarlos, para producir, por este medio, en el ánimo del Gran Jurado una disposición favorable hacia la persona que defiende. Se ha dicho en Jalisco que esta acusación tiene por móviles otros que no el ciego amor que sus autores profesan a la Constitución.

Yo declaro, a nombre del acusado, que él desea, por honor del estado de Jalisco, abrigar siempre la certidumbre de que esta especie es gratuita, y espera que por nadie se le suponga el menor participio en semejante agravio.

Ahora bien, supuesta la relación ingenua y exacta que dejo consignada, combatiré brevemente los cargos en que se funda el dictamen de la sección del Gran Jurado que va a discutirse.

Se pretende en él que el acusado no debió haber publicado el decreto número 61, de la Legislatura, en que se puso en vigor la circular de 12 de marzo de 1861, por ser sus prescripciones contrarias a los preceptos constitucionales que otorgan y aseguran a los habitantes de la República las garantías que deben disfrutar. Se pretende también que una vez habiéndola publicado y venido el caso especial de aplicarlo a los cinco reos que se ejecutaron el día 24 de febrero último en la ciudad de Guadalajara, debió haber suspendido la ejecución en cumplimiento del proveído por el juez de distrito que los amparó, y que por no haberlo hecho así infringió la ley orgánica general de 30 de noviembre de 1861.

Me complazco, señor, ante todo, en reconocer que el dictamen no tiene otra inspiración ni otro origen que los sabios principios constitucionales que norman el proceder de los ilustrados miembros de la sección. Yo respeto altamente sus opiniones y persuadido el primero de que la observancia estricta de nuestra Carta fundamental, debe ser la base de todos los actos de los funcionarios, tanto de la federación como de los estados, aplaudo el celo con que la sección vigila y por esa observancia, único medio de consolidar nuestro sistema político y hacer efectivo nuestro derecho público. Mas, séame lícito rogar al Gran Jurado que se digne pesar en todo su valor las observaciones que me atreveré a emitir para desvanecer, si me es posible, la fuerza de los fundamentos legales en que el dictamen se apoya. La fracción 1ª del artículo 28 de la Constitución particular del estado, auténticamente interpretada por las declaraciones de la Legislatura, que existen entre las pruebas exhibidas, y reglamentada por la fracción 3ª del artículo 16 del decreto número 73, que también ha sido presentado, no deja lugar a duda alguna sobre la obligación imprescindible que el Poder Ejecutivo tiene de publicar las leyes expedidas por la propia Legislatura, sin observación de ningún género, no siendo, como no es, el sancionador de ellas, sino sólo el primer órgano de su publicación, como son los secundarios las autoridades políticas en sus demarcaciones respectivas. En caso, pues, de anticonstitucionalidad de alguna de estas leyes, la responsabilidad es exclusiva de la Legislatura, puesto que en la esencia del acto que les da el carácter de tales, no entra para nada la voluntad del Poder Ejecutivo.

Sentado este inconcuso principio, para cuya demostración basta la lectura de las disposiciones que cito, considero por demás tratar el punto de la anticonstitucionalidad del decreto número 61. Básteme concluir, de lo expuesto, que el gobierno no pudo contraer ni contrajo ninguna responsabilidad por motivo de su publicación. No queda así más materia de cargo contra él, que la del hecho de no haber mandado suspender la ejecución de la providencia sobre que recayó el recurso de amparo de garantías; y reducida la cuestión a este terreno, reconozco sumisamente la competencia del Gran Jurado para resolver sobre la culpabilidad e inculpabilidad del hecho. El artículo 1º de los reglamentarios del decreto número 61, confiere a los jefes políticos de los cantones, y directores de los departamentos de Jalisco, la facultad de proceder contra los ladrones, plagiarios y asesinos, en los términos que el mismo decreto establece. En tal virtud, los cinco reos de que se trata fueron juzgados y mandados ejecutar por el jefe político del cantón de Guadalajara.

Conforme a la ley de 30 de noviembre de 1861, el juez de distrito tiene que dirigirse, declarando que debe abrirse el juicio de amparo, a la autoridad de quien haya emanado el acto o providencia que origine el recurso, y no a su superior. Esto es tan obvio que salta a la vista, y se halla además claramente definido en el artículo 14 de dicha ley, cuando al tratarse del requerimiento para la ejecución del fallo con que determine el juicio, previene que sólo se haga al superior de la autoridad responsable, si ésta no hubiere acatado el fallo después de tres días de recibido. En consecuencia, si únicamente en este caso puede el juez de distrito dirigirse al superior, claro es que no tiene que entenderse con él en ninguno de los autos ni trámites del procedimiento.

Malamente, pues, el juez de distrito de Guadalajara libró al gobierno el oficio que debía mandar al jefe político, de quien debía proceder, la providencia, materia del amparo en cuestión, como malamente podría haberse dirigido al Supremo Tribunal de Justicia, para notificarle que debía abrirse el juicio sobre un acto cualquiera de un juez de primera instancia. Si se hubiera entendido con el jefe político, éste habría sido parte en el juicio en la forma que dispone el artículo 7º de la ley, procediendo, como era necesario, la suspensión de la providencia; y

si el jefe político se hubiera rehusado a someterse a estos trámites, habría tenido lugar la responsabilidad. Pero no sucedió así. El procedimiento del juez fue irregular y extraviado, y si por este motivo no surtió sus efectos legales, tal circunstancia no puede ser imputable al gobernador, como no lo sería al jefe de la fuerza militar o a otra autoridad cualquiera extraña al acto de que se trataba, si con ellas hubiera querido entenderse el tribunal de la federación.

Tan cierto es esto, que después de aquel suceso, el juez, habiendo comprendido su error, se ha entendido directamente con el jefe político de Guadalajara en todos los casos de igual naturaleza.

Se me objetará que el gobernador debió haber advertido al juez cuál era el camino legal para llegar a su fin pero él no tenía, por precepto de ninguna ley, la obligación de instruir al juez de las suyas, ni de servirle de asesor. El indicarle el error en que había incurrido, se hubiera, a lo sumo, estimado como un acto de deferencia conveniente a la armonía que debe reinar entre poderes de diversos órdenes; yo estoy seguro de que en circunstancias distintas de las que oprimían entonces el ánimo del gobernador, y le amagaban con la más grande de las responsabilidades, que era la de conservar la vida y la hacienda de los ciudadanos, él no habría vacilado en hacer al juez el obsequio de manifestarle su inadvertencia. Mas esta atención oficiosa era, en aquel instante, materialmente inconciliable con la profunda convicción que él tenía, del inmenso peligro que venía a renovar la alarma de la sociedad, cuyas garantías, que son el conjunto de las garantías individuales de todos y cada uno de los ciudadanos, estaban en verdadero conflicto con las de cinco bandoleros. Se tenía que optar entre unas u otras; el juez de distrito no supo amparar las de los criminales; el gobernador sí supo amparar las de los hombres honrados.

De lo anterior resulta que el ciudadano Antonio Gómez Cuervo no ha incurrido tampoco en responsabilidad por infracción de la ley de 30 de noviembre de 1867 (sic).

Señor: voy a concluir mi difícil cuanto honrosa tarea; pero no lo haré sin llamar antes la atención del Gran Jurado, sobre las circunstancias en que se halla Jalisco, para que se sirva tomarlas en cuenta, al meditar

sobre la gravedad del fallo que aquel estado, más bien que el presupuesto reo, espera con inquietud y zozobra.

La tranquilidad pública, que estaba ya casi restablecida del todo, empieza a resentirse de los primeros efectos de la acusación contra el ciudadano Gómez Cuervo. Fuera de la honda conmoción que ha producido en todos los ánimos este incidente, por su propia naturaleza y por su gran importancia, es digno de atenderse que los malhechores cobran aliento con la esperanza de la impunidad, y vuelven al teatro de sus antiguas y crueles hazañas. Algunos de los plagiarios, atormentadores feroces, que hace algunos meses sembraron el espanto y la desolación en las familias obligando a los agricultores a abandonar sus campos, y a los comerciantes a suspender sus ferias, han hecho ya nuevas víctimas. Dos crímenes de plagio se acaban de cometer en los cantones de Lagos y La Barca, y la insolencia y audacia de los bandidos de toda especie, tal vez pronto ya no tendrá límites.

Tanto el acusado, como Jalisco entero, respetarán sumisos la resolución que se dicte en este asunto si les fuere adversa, lo protesto así, en nombre del primero; pero en nombre de los dos, pido que se procure apreciar con exactitud la situación en que se encontraba el Estado, cuando tuvo lugar el hecho que hoy se califica de delito, y la en que se agita ahora con mortal angustia; pido que aun en el supuesto de considerarse anticonstitucional el proceder del acusado, no se le declare reo como no se les ha declarado a otros muchos funcionarios que, bajo la inexorable y suprema ley de la necesidad, han tenido que salirse, a su pesar, de la órbita de sus atribuciones y facultades legales; y pido, por último, que ya que la buena causa que defendiendo ha tenido la mala suerte de confiar su vindicación a mi impotente palabra, se escuche en cambio la poderosa y unánime voz de las poblaciones, que llega hasta aquí a solicitar, de este augusto tribunal, justicia para el acusado, si se le cree inocente y, si se le haya culpable, gracia para Jalisco.

(S.C.)

Pantaleón Tovar

LA SECCIÓN DEL GRAN JURADO PROPONE SE DECLARE NO
CULPABLE AL GOBERNADOR ANTILLÓN

Señor:

La sección del Gran Jurado ha examinado la acusación presentada contra el ciudadano gobernador del estado de Guanajuato, Gral. Florencio Antillón, así como el expediente formado a causa de dicha acusación. El ciudadano Antillón es acusado: 1o.—por haber violado la libertad electoral que garantiza la Constitución y las leyes vigentes; 2o.—por haber infringido la mencionada Constitución y leyes vigentes, concediéndose él mismo facultades que la Constitución y leyes reservan a las asambleas electorales, porque tal es la naturaleza del voto popular y 3o.—por haber ejercido él mismo funciones que por la naturaleza y por las prescripciones de la Constitución y ley electoral, no pueden competir sino a las asambleas populares."

Los hechos por los que incurrió el ciudadano Antillón en estas responsabilidades, son según la acusación: la remoción de los prefectos de los distritos del estado, de quienes se temía no fuesen partidarios de la candidatura de Antillón; la prisión de algunos electores de quienes se tenía igual temor; la ocupación militar de algunas poblaciones para aumentar con los votos de los soldados el número de los amigos del mismo ciudadano Antillón y, finalmente, la expedición de dos decretos fechas 6 de octubre y 16 de noviembre del año próximo pasado, por los que declaró que él mismo presidirá la junta de escrutinio de los votos de los diputados electos a la Legislatura, y cuya junta debía también declarar cuáles credenciales eran buenas o no, y que en esta junta se tuvieron por el ciudadano Antillón procedimientos en contraposición con la Constitución y leyes del estado de Guanajuato.

La sección, en cumplimiento de su deber, ha recibido todas las pruebas que quiso presentar la acusación, todas las cuales se dirigen a demostrar los hechos que han dado lugar a la responsabilidad que hoy se le exige al ciudadano gobernador constitucional del estado de Guanajuato.

La Constitución federal en su artículo 103 declara que los gobernadores de los estados son responsables por infracción de la Constitución y leyes federales, dejando por consiguiente a las Constituciones particulares de los estados la facultad de determinar el modo con que se les debe exigir la responsabilidad por la infracción de la Constitución y leyes particulares y sin que el Congreso de la Unión pueda intervenir en estas cuestiones, pues su intervención amenazaría profundamente la independencia de estos mismos estados.

La sección ha creído de su deber abstenerse de toda apreciación sobre el valor o fuerza legal que puedan tener las pruebas contenidas en este expediente, supuesto que todas son dirigidas a probar los hechos de la acusación: hechos sobre los que también se abstiene de formar juicio, porque la acusación y pruebas son evidentemente sobre infracciones de la Constitución y leyes particulares del estado de Guanajuato, sin que parezca el más leve indicio para que se pueda declarar que ha habido alguna infracción de la Constitución o leyes federales.

Por todo lo expuesto, la sección del Gran Jurado consulta al Congreso de la Unión se sirva declarar en esta acusación, con arreglo al artículo 105 de la Constitución, que

"El ciudadano Florencio Antillón, Gobernador Constitucional del Estado de Guanajuato, no es culpable por violación de la Constitución ni leyes federales."

Sección del Gran Jurado, mayo 19 de 1868.

(Francisco de Paula) Cendejas

(Protasio) P. Tagle

(Antonio) García Carrillo

(Juan) Sánchez Azcona
Secretario

LEÓN GUZMÁN OPINA SOBRE LA POSICIÓN DEL EJECUTIVO
FRENTE A LEYES ANTICONSTITUCIONALES

Ciudadano ministro de Justicia e Instrucción Pública
Presente

Si dichos funcionarios no tuvieran un recurso contra las leyes u órdenes que se hallen en cualquiera de los tres casos del artículo 101, quedarán en la dura necesidad de incurrir en una responsabilidad; porque tan culpables serían faltando al deber que tienen de cumplir y hacer cumplir o aplicar, según el respectivo caso, las leyes, o al de obedecer las órdenes de sus superiores, como publicando y ejecutando o aplicando, según el caso, leyes u obedeciendo órdenes que se hallen en el caso de cualquiera de las tres fracciones del repetido artículo 101.

En tan dura alternativa, el remedio natural se encuentra en el mismo artículo 101, pues indudablemente los funcionarios públicos tienen, en virtud de él, la facultad de pedir amparo, para que se les exonere de la obligación de publicar, cumplir o ejecutar leyes o actos que se hallen en el caso del tantas veces citado artículo.

Estas consideraciones me deciden a proponer los siguientes artículos que llevarán la numeración correspondiente:

Artículo 10.—Tienen derecho a pedir amparo:

Primero: El Presidente de la República para que se le exonere de la obligación de publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales que se hallen en el caso de las fracciones 1a. o 2a. del artículo 101 de la Constitución.

Segundo: Todos los funcionarios de la federación para que se les exonere de la obligación de cumplir o ejecutar las leyes o actos que se encuentren en el caso del artículo anterior. Tercero: Los gobernadores de

los estados para que se les exonere de la obligación de publicar y cumplir las leyes del respectivo estado que se hallen en el caso de las fracciones 1a. y 3a. del mismo artículo 101; y de cumplir y obedecer las leyes u órdenes de la autoridad federal que se hallen en el caso de las fracciones 1a. y 62a.

Cuarto: Todos los funcionarios públicos de los estados para que se les exonere de la obligación de ejecutar las leyes o actos de la federación o del estado que respectivamente se hallen en el caso del artículo 101.

Artículo 2o.—Si el amparo fuere pedido por algún gobernador de estado, conocerá en primera instancia el Tribunal de Circuito a cuya demarcación corresponde el estado; y la segunda y tercera instancia, en caso de que procedan, tendrán lugar ante la Suprema Corte de Justicia, conforme a su reglamento.

Artículo 3o.—Si el amparo fuere pedido por el Presidente de la República, o por algún alto funcionario de la federación, la primera instancia y las demás, si proceden, serán ante la Suprema Corte de Justicia. Se entiende por altos funcionarios, para los efectos de este artículo, los secretarios de Estado y los ministros de la Suprema Corte de Justicia y fiscal y procurador general.

Los artículos 31, 32, 33 y 34, que componen la sección 4a., pueden quedar como están, aunque convendría suprimir la parte final del 33, porque siendo una prevención constitucional no hay necesidad de repetirla y porque además es inconducente cuando se trata de los juicios de amparo.

Tales son las reformas que me parece conveniente se hagan a la ley de 26 de noviembre de 1861. No se me oculta que son graves y delicadas todas las materias que se relacionan con los juicios de amparo, y tengo el convencimiento de que ningún estudio sería excesivo para llenar el importante objeto de profundizarlas y dar a la ley toda la posible claridad. Temo que, a pesar de mis esfuerzos, el trabajo que tengo la honra de presentar adolezca de muy graves defectos; pero confío en que sabrá

corregirlos la ilustración del Ejecutivo y a su vez la del Congreso de la Unión.

Independencia y Libertad. México, junio 19 de 1868.

León Guzmán